

San Miguel de Tucumán, 14 de Noviembre de 2024.

Al Sr.

Presidente de la

Excma. Corte Suprema de la

Provincia de Tucumán

Dr. Daniel Leiva

S. _____ / _____ D.

Ref.: Actuaciones Nº 14533/24

Leonardo Andrés Toscano, juez del Juzgado del Trabajo de la Sexta Nominación del Centro Judicial Capital, por la presente vengo a responder la vista cursada respecto de la denuncia en mi contra efectuada por la Sra. Gabriela Carolina Luna (DNI Nº 25.700.556), quien invoca carácter de socia y administradora de la firma Emporio El Telar SAS, con el patrocinio letrado de Alejandro Torres (MP 2561) y solicitar, por los argumentos que se expondrán, se desestime la denuncia y se proceda al archivo de las actuaciones.

Teniendo en cuenta el contenido de la denuncia realizada, se requiere a V.E. se investigue y sancione a este magistrado por mi actuación jurisdiccional cumplida en el marco de la causa caratulada **“Barrionuevo Adriana Karina vs Textil Marcas SA” (Expte. Nº 1354/16), en especial en las realizadas en el incidente Nº 2 (incidente de embargo promovido por la parte actora)**, los que tramitan ante el Juzgado del Trabajo de la Sexta Nominación a mi cargo.

1. Ahora bien, lo primero que corresponde indicar en este responde es que el agravio formulado por la denunciante como fundamento de la presente denuncia administrativa es la reiteración de un pedido de levantamiento de embargo planteado por la misma firma que representa la denunciante (Emporio El Telar SAS), pero en aquella oportunidad a través del letrado apoderado Patricio Torres, en el trámite del incidente Nº 2 antes mencionado –incluyendo los mismos hechos, argumentos y documentación probatoria que agrega en estas actuaciones administrativas- y que ya fue resuelto y rechazado mediante sentencia dictada por el dicente en fecha 26/7/24 (esto es, hace casi cuatro meses), pronunciamiento que se encuentra firme, conforme consta en las mencionadas actuaciones, las que se dejan ofrecidas como prueba en su totalidad.

El mencionado pronunciamiento judicial se emitió luego de haber oído a las partes (pedido de levantamiento de embargo de Emporio El Telar SAS, por escrito del 18/12/2023, contestación de traslado de la parte actora por escrito del 1/2/2024) y producidas las pruebas ofrecidas (desde el decreto que dispuso la admisibilidad de las ofrecidas el 21/2/24, hasta el cierre de esa etapa decretado el 5/6/24). En dicha resolución (26/7/24), luego de analizar la totalidad de las pruebas aportadas (documental e informativa) se dispuso el rechazo del pedido, entre otros fundamentos allí expuestos, porque se había acreditado que las empresas Textil Marcas SA (demandada en autos) y Emporio El Telar SAS (incidentista), tenían su

domicilio o explotaban el local ubicado en el mismo lugar (calle 25 de Mayo 470 de esta ciudad) y que no se había acreditado la explotación en forma exclusiva del local comercial por parte de la incidentista (EET) y, con ello, se descartó la posibilidad de aplicar la presunción de titularidad de los bienes muebles que se encontraren en un domicilio, tal como lo dispone el art. 1895 del CCCN.

Es decir, se emitió una resolución debidamente fundada (más allá de la opinión jurídica o reparos que pudiera esgrimir la denunciante respecto de la legitimidad de la misma), que se encuentra firme a la fecha de esta presentación.

Es claro entonces que, tal como lo ha decidido V.E. en numerosas y reiteradas oportunidades, las cuestiones como las aquí planteadas, no resultan admisibles o pertinentes para activar el ejercicio de la facultad de superintendencia de la Corte respecto de la actuación de los miembros del Poder Judicial.

Ello por cuanto surge claro del texto de la denuncia que se responde que solamente hace referencia a un conflicto de derechos e intereses entre partes en el marco de un proceso judicial y que fueron resueltas en cumplimiento de las reglas procesales vigentes, con el debido resguardo de la garantía del debido proceso, en el que las partes tuvieron la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y plantear los pertinentes recursos en contra de las decisiones judiciales que no hubieran sido acordes a sus pretensiones o intereses.

En virtud de lo antes indicado, conociendo la denunciante y su letrado patrocinante los alcances del poder de superintendencia de la Excma. Corte, es legítimo interpretar que esta denuncia, la que repito, es la reiteración de lo ya decidido mediante una sentencia judicial firme en la que se rechazó el pedido de levantamiento de embargo, tiene como única finalidad amedrentar o intimidar a este magistrado para que evite cumplir con el correcto ejercicio de mis funciones jurisdiccionales.

2. Volviendo al contenido de la denuncia efectuada, debo resaltar que no resulta coincidente con las actuaciones cumplidas en el incidente Nº 2 antes referido (expte. Nº 1354/16-I2) que se le haya exhibido al oficial de justicia interviniente documentación que acreditaría que la denunciante ocupa el establecimiento donde se cumplieron las medidas de embargo y secuestro de bienes.

Para corroborar lo indicado basta con cotejar el contenido de las actas emitidas por los oficiales de justicia actuantes en las medidas realizadas en el local comercial ubicado en calle 25 de Mayo 470 de esta ciudad, los días 18/11/2022, 9/6/2023 y 23/10/2024 (agregada en actuación de fecha 4/11/24 del expediente digital). Reitero, en ninguna de todas estas actuaciones consta que el Sr. Diego Coronel –persona que recibió al oficial de justicia en todas estas oportunidades- hubiera exhibido documentación alguna durante la ejecución de las medidas realizadas en las fechas mencionadas.

Incluso, tal como lo describe la propia denunciante respecto de su propia responsabilidad (*“Tampoco se puede atribuir responsabilidad a mi cliente por los trámites administrativos que dicha empresa no haya realizado para perfeccionar su domicilio declarado judicialmente en calle San Lorenzo N°502, piso 2, depto 2”*), lo mismo cabe con relación a la tarea jurisdiccional que se realiza en el marco del proceso judicial, donde, tal como consta en las actuaciones mencionadas, durante la tramitación del incidente de levantamiento de embargo requerido por la empresa denunciante, los informes solicitados como prueba dieron con resultado que la empresa demandada (Textil Marcas SA) tiene como domicilio legal el sito en el local donde se dispuso la medida de embargo y secuestro de bienes muebles.

3. Con relación al pretendido obrar incorrecto (agrega en su texto que ello obedece a un obrar irresponsable e intencional) de este magistrado en cuanto denuncia que no se habría consignado en el mandamiento que la medida debía llevarse a cabo con la previa comprobación de que ese local pertenecía a la demandada Textil Marcas SA, cabe indicar que la confección de los mandamientos que contienen la comunicación de una orden judicial para ser cumplida compulsivamente a través de los oficiales de justicia dispuestos por la Excm. Corte, no son confeccionados por los magistrados, sino por los funcionarios, actualmente, de la Oficina de Gestión Asociada que asiste a los jueces de la provincia, en el caso, la OGAT1.

No obstante ello, es importante destacar que no existió en el expediente el alegado obrar incorrecto, pues en la resolución dictada el 12/10/2023 expresamente se indicó que la medida de embargo y secuestro debía realizarse sobre **“... bienes muebles que tuviera la accionada Textil Marcas SA (CUIT 33-71148466-9) en su domicilio sito en Calle 25 de Mayo N°470...”** (punto 1º de la parte resolutive) y, luego, en el mandamiento librado para la ejecución de aquella medida se transcribió el texto antes mencionado (mandamiento del 8/10/24, actuación H105015334958 del expediente digital anteriormente referenciado).

4. En definitiva, la totalidad de las cuestiones alegadas como fundamento para “revisar, controlar y sancionar” (tal como lo requiere la denunciante) el accionar de este magistrado en el marco de la causa **“Barrionuevo Adriana Karina vs Textil Marcas SA” (Expte. N° 1354/16), en especial en las realizadas en el incidente N° 2 (incidente de embargo promovido por la parte actora)**, carecen de fundamentos legítimos fácticos y de admisibilidad, tal como fue expuesto precedentemente.

5. Por otra parte cabe destacar y resaltar que no podrían presumirse como ciertas las alegaciones realizadas por la denunciante respecto del desconocimiento de la firma demandada en el proceso de referencia (Textil Marcas SA) pues existen elementos en aquel proceso judicial como en las presentes actuaciones administrativas que denotan que además de encontrarse ocupando el mismo lugar en que funciona o funcionaba la firma accionada (calle 25 de Mayo 470 de esta ciudad), también cuenta con el mismo plantel de empleados y es asesorada y representada por el mismo estudio jurídico de abogados que asesora y representa a la demandada Textil Marcas SA.

Al respecto repárese que, tal como se indicó anteriormente, en todas las actuaciones cumplidas por los oficiales de justicia en el local ubicado en calle 25 de Mayo 470 consta que fueron recibidos por el Sr. Diego Coronel (actas de fechas 18/11/2022, 9/6/2023 y 23/10/2024), esto es, tanto con anterioridad a la época en la que la denunciante (Emporio El Telar SAS) alega que comenzó a explotar aquel local comercial, como también luego de esa fecha, según los propios documentos que se agregan a estas actuaciones administrativas (resolución de habilitación municipal de octubre de 2023, factura B donde consta inicio de actividades en mayo 2023, alta de AFIP y recibo de sueldo de Diego Coronel donde consta fecha de ingreso en julio de 2023).

Con relación al asesoramiento y representación jurídica de ambas empresas (Textil Marcas SA y Emporio El Telar SAS), cabe sostener que el mismo estudio de abogados, conformado por Alejandro Torres, Patricio Torres y Martín José Alzabé cumplen aquel rol en forma indistinta, alternada y conjunta.

Ello surge tanto del rol de patrocinante del letrado Alejandro Torres de Emporio El Telar SAS en estas actuaciones administrativas, como del rol de apoderado de la misma empresa del letrado Patricio Torres en el marco del incidente N° 2 del expediente judicial antes referido (1354/16-I2)

Además, el letrado Alejandro Torres se apersonó como letrado apoderado de la firma demandada Textil Marcas SA en el expediente principal del juicio mencionado (fs. 97 del expediente físico, hoja 197 del PDF correspondiente al primer cuerpo del expediente digitalizado agregado en fecha 25/8/22 en el expediente N° 1354/16).

Incluso los tres letrados mencionados fueron designados como apoderados en los poderes para juicios agregados por ambas firmas (TM y EET) tanto en el expediente principal como en el incidente N° 2 (juicio: “Barrionuevo Adriana Karina vs Textil Marcas SA”, expte. N° 1354/16), tal como puede constatarse en el poder para juicio otorgado por Textil Marcas SA mediante escritura pública N° 57 del 13/3/2017 ante el registro notarial N° 45 de esta ciudad (documento obrante fs. 92/93 del expediente físico, hoja 187/190 del PDF correspondiente al primer cuerpo del expediente digitalizado agregado en fecha 25/8/22 en el expediente N° 1354/16) y del poder para juicios otorgado por Emporio El Telar SAS mediante escritura pública N° 253 del 30/10/2023, también ante el registro notarial N° 45 de esta ciudad (documento agregado por el letrado Patricio Torres en actuación del 18/12/2023 – 19:46, obrante en el Incidente N° 2 del expediente antes detallado).

Estos datos corroboran la insinceridad de los hechos alegados por la denunciante y, además, plantean serias dudas respecto del obrar lícito y ético tanto de la denunciante como de los letrados que asesoran, patrocinan y representan a ambas firmas involucradas –con intereses contrapuestos dentro del marco del proceso judicial de referencia- en los términos del art. 7 incisos 1º y 2º de la Ley N° 5233 de Ejercicio Profesional de la Abogacía, lo que dejo a criterio de VE si es que correspondiera ser objeto de investigaciones y sanciones.

6. Por todo lo expuesto, solicito se tenga por contestada la vista en tiempo y forma, se tenga por ofrecida como prueba la totalidad de las actuaciones obrantes en este expediente administrativo y las que corresponden a la causa judicial caratulada “Barrionuevo Adriana Karina vs Textil Marcas SA” (Expte. N° 1354/16), en especial en las realizadas en el incidente N° 2 (incidente de embargo promovido por la parte actora) que tramitan ante el Juzgado del Trabajo de la Sexta Nominación a mi cargo.

En caso que lo estime VE se proceda a la investigación de los hechos y circunstancias descriptas en el punto 5º de este responde.

7. Finalmente, por todo lo expuesto solicito a VE desestime la denuncia presentada por la Sra. Gabriela Carolina Luna (DNI N° 25.700.556), quien invoca carácter de socia y administradora de la firma Emporio El Telar SAS, con el patrocinio letrado de Alejandro Torres (MP 2561 y se proceda al archivo de las actuaciones.

DIOS GUARDE A V.E.

LEONARDO ANDRES TOSCANO
JUEZ
JUZGADO DEL TRABAJO – SEXTA NOMINACION